

793-14

TRIBUNAL SANCIONADOR DE LA DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR: Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, a las catorce horas del día veintiocho de junio de dos mil diecisiete.

El día veintiséis de julio de dos mil dieciséis se presentó escrito firmado por el licenciado _____ quien actúa en su calidad de apoderado general judicial de la _____ mediante el cual se muestra parte en la calidad antes indicada pudiendo actuar conjunta o separadamente con la apoderada anteriormente nombrada licenciada _____ y presenta la documentación que se encuentra agregada de folios 112 a 121.

Se da intervención al licenciado _____ en su calidad de apoderado general judicial de _____, para que pueda actuar conjunta o separadamente con la licenciada _____ teniendo por agregada la documentación que presenta.

I. En sus escritos los apoderados de la proveedora en síntesis expusieron, que la Presidencia de la Defensoría del Consumidor no tiene ninguna facultad para presentar la denuncia que dio origen al presente procedimiento, debido a que llegaron a un acuerdo conciliatorio y se devolvió al colectivo de consumidores la cantidad de mil sesenta y siete dólares de los Estados Unidos de América con catorce centavos (US\$1,067.14).

Por lo anterior, consideraron que la actuación de la Presidencia de la Defensoría del Consumidor es meramente discrecional y que en la Ley de Protección al Consumidor no existen parámetros claros y objetivos sobre la interposición de denuncias por casos colectivos. Sin embargo, al tratarse este argumento vinculado a la falta de legitimación activa, considerada un presupuesto esencial para que la sentencia resulte eficaz, este Tribunal debe aclarar lo siguiente:

Por mandato constitucional, la Administración Pública se encuentra vinculada al principio de legalidad de forma positiva, de conformidad con el artículo 86 inciso final de nuestra Carta Magna, en donde se regula que "(.....) *Los funcionarios del Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley*". De ahí que, se sostenga la idea trascendental que la Administración Pública sólo puede actuar cuándo y cómo la ley la faculte.

En razón de lo anterior, resulta lógico afirmar que la vinculación legal se aplica tanto a los cauces procesales como al ámbito sustancial de la actuación de la Administración Pública; y que por tal razón todas las autoridades y funcionarios públicos deban seguir los

procedimientos legalmente regulados, no pudiendo apartarse de los lineamientos y etapas planteadas como necesarias para emitir sus actos decisorios.

En ese sentido, con base en lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley de Protección al Consumidor –en adelante LPC-, la Defensoría del Consumidor cuenta con un Centro de Solución de Controversias, a fin de resolver los conflictos entre proveedores y consumidores, a través de medios alternos, de manera simple, breve, gratuita y confidencial. Motivo por el cual, los consumidores y proveedores pueden mediar, conciliar, someter a arbitraje o convenir en la solución de sus controversias ante la Defensoría del Consumidor, y su acuerdo produce los mismos efectos de la transacción, según determinan los artículos 5 inciso segundo y 117 de la LPC.

Al examinar la normativa aplicable, encontramos que el artículo 52 de la LPC dispone que si se tratare de afectación a un interés individual –denuncia individual-, el cumplimiento del arreglo alcanzado en la mediación o conciliación entre la proveedora y el consumidor, excluirá la responsabilidad administrativa del proveedor. Para el caso en particular, y no obstante que las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio, por tratarse de denuncia colectiva, no puede aplicarse dicho eximente de responsabilidad, ya que el legislador le dio un tratamiento diferente a aquellos casos en que la afectación trasciende a más de una persona -*interés colectivo o difuso*-, por lo que, a pesar de existir arreglo conciliatorio, tal como ha expresado este Tribunal en resolución pronunciada el día veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, bajo la referencia 856-1, *“la Presidencia de la Defensoría del Consumidor tiene la facultad de iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio, cuando considere que existan elementos suficientes sobre el posible cometimiento de una infracción”*; siempre y cuando cumpla con los supuestos objetivos que se deben tener en cuenta para presentar la denuncia, tal como lo establece el artículo 52 inciso final de la LPC, relacionado con el artículo 143 letra b) e inciso final de la misma ley. En consecuencia, el hecho que la proveedora haya llegado a un arreglo conciliatorio no le exime de responsabilidad frente al Estado por la infracción administrativa.

Por lo tanto, los argumentos expuestos por los apoderados de la proveedora no son válidos, ya que no es discrecional ni arbitrario iniciar –o no- el procedimiento, pues la LPC faculta los casos en que procede –afectación de intereses colectivos- y exista un posible cometimiento de una infracción; a lo cual se dio cumplimiento en la denuncia, y ello fue oportunamente examinado por este Tribunal al realizar el análisis de admisión de la misma.

En ese sentido, la denuncia interpuesta por la Presidenta de la Defensoría del Consumidor aportó los elementos necesarios de la imputación, y éste Tribunal es quien decide conforme a la prueba que consta en el expediente si se comprueba o no la concurrencia de los elementos del supuesto de hecho de la infracción atribuida al denunciado.

Una vez determinado lo anterior, habiendo concluido el trámite que señala la ley, sin que quede pendiente pruebas que practicar, de conformidad a lo estipulado en el artículo 147 de la LPC, se procede a emitir la resolución final en el presente procedimiento.

II. El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido promovido en virtud de la denuncia interpuesta por la Presidencia de la Defensoría del Consumidor, en aplicación de los artículos 69 letra i) y 143 letras b) y d), de la LPC en contra de , por supuesta infracción al artículo 44 letra e) en relación al artículo 18 letra c) de la LPC, por realizar prácticas abusivas consistentes en la realización de cobros indebidos en perjuicio de los siguientes consumidores:

En la denuncia presentada por la Presidencia de la Defensoría del Consumidor, sobre la base del expediente identificado bajo referencia nueve ocho siete tres nueve (98739), tramitado por el Centro de Solución de Controversias de la Defensoría del Consumidor, se ha expuesto que el colectivo de consumidores afectados tienen su domicilio en la C

El hecho denunciado, según se consigna en el escrito de la Presidencia de la Defensoría del Consumidor, radica en la falta de transparencia y certidumbre sobre la debido a que aplicó erróneamente la residencial desde el mes de junio del año dos mil doce hasta el mes de marzo del año dos mil trece, cuando tuvo que haber aplicado la por servicio de cantarera cuyo costo es inferior.

Asimismo, en el referido escrito se mencionó que el día veintitrés de mayo de dos mil trece, mediante acuerdo conciliatorio -folios 95-, se comprometió a devolver a los consumidores afectados un monto de *mil sesenta y siete dólares de los Estados Unidos de América con catorce centavos (US\$1,067.14)*, por exceso de cobro del

Sin embargo, la denunciante manifestó que se afectaron los derechos económicos de los usuarios cuando la [redacted] alterada de forma unilateral por la proveedora; máxime tratándose de [redacted], en donde al usuario no le quedó otra alternativa que aceptar y pagar [redacted] que la proveedora exigió. Por lo antes descrito, la Presidencia de la Defensoría del Consumidor le atribuye a la proveedora la infracción descrita en el artículo 44 letra e), en relación al artículo 18 letra c), ambos de la LPC, por realizar prácticas abusivas al efectuar cobros indebidos en la [redacted]; lo cual, de establecerse, daría lugar a la imposición de la sanción descrita en el artículo 47 de la LPC.

III. En cumplimiento de las garantías del debido proceso, con el propósito de que ejerciera su derecho de defensa, le fue notificado a la proveedora, en legal forma, los hechos denunciados consistentes en cobros indebidos -según lo dispuesto en el artículo 44 letra e) de la LPC- en la [redacted]

En fecha veintitrés de septiembre de dos mil quince, la licenciada [redacted], en su calidad de apoderada general judicial y administrativa con cláusula especial [redacted], presentó escrito, que se encuentra agregado a folios 104, mediante el cual compareció en el procedimiento, anexando fotocopia certificada notarialmente de Escritura Pública de Poder General Judicial y Administrativo con Cláusula Especial, según consta de folios 105 al 109.

En el escrito antes mencionado, la apoderada de la proveedora expresó que no es cierto que su patrocinada haya incurrido en la conducta descrita en el artículo 44 letra e), en relación al artículo 18 letra c), ambos de la LPC, por el supuesto hecho de efectuar cobros indebidos por [redacted]

Para respaldar lo anterior, ofreció la prueba siguiente: a) acta final de conciliación suscrita el día veintitrés de mayo de dos mil trece; y b) documentación correspondiente de los abonos realizados al colectivo de consumidores; manifestando que sería presentada en el presente procedimiento en fase probatoria, de conformidad a lo prescrito en los artículos 145 inciso último y 146 de la LPC.

IV. Este Tribunal, mediante resolución de las catorce horas con treinta y nueve minutos del día veintinueve de septiembre de dos mil quince, tuvo por parte [redacted], por medio de su apoderada licenciada [redacted] y por agregada la documentación presentada por la referida profesional. Además, se abrió a prueba el procedimiento de [redacted]

conformidad con los artículos 145 y 146 de la LPC, fase procedimental que fue legalmente notificada a la proveedora el día catorce de julio de dos mil dieciséis, según consta a folios 111.

Asimismo, el licenciado en calidad de apoderado especial de la proveedora, presentó escrito a éste Tribunal, el cual ha sido relacionado al inicio de la presente resolución en el que, expuso –en esencia- que en fecha veintitrés de mayo de dos mil trece, se realizó el acta final de conciliación con acuerdo entre la apoderada del colectivo de denunciantes y los apoderados. Manifestando que dicho acuerdo consistió en la devolución en efectivo que haría a los consumidores por un monto de *un mil sesenta y siete dólares de los Estados Unidos de América con catorce centavos (US\$1,067.14)*, por haber facturado con tarifa residencial e durante los meses de junio de dos mil doce hasta marzo de dos mil trece, habiendo sido lo correcto la tarifa de cantarera. Debido a que la cantidad antes descrita fue devuelta a los consumidores afectados, el referido profesional arguyó que el supuesto derecho violentado fue restituido. Por este motivo, considera que no es procedente la imposición de una sanción, pues no es culpable.

Finalmente, el licenciado argumentó que el periodo dentro del cual se ejecutaron los supuestos cobros indebidos sería atribuible en todo caso a

no a debido a que su patrocinada asumió la gestión comercial de dicho sistema de hasta el mes de abril de dos mil trece. Por tanto, consideró que existe falta de legitimación respecto de su representada. Para fundamentar lo anterior, el licenciado presentó el acta de acuerdos bilaterales para la liquidación y el cierre del contrato n° 43/2006, suscrito entre según consta en folios 120 y 121.

V. Establecidas las posiciones jurídicas de las partes en el presente procedimiento, es necesario realizar las siguientes consideraciones respecto de los hechos constitutivos de ***cobros indebidos***:

El artículo 44 letra e) de la LPC establece que constituye una infracción muy grave: “....realizar prácticas abusivas en perjuicio de los consumidores”. Asimismo, el artículo 18 de la referida ley dispone que queda prohibido a todo proveedor lo siguiente: (...) c) “Efectuar cobros indebidos, tales como cargos directos a cuenta de bienes o servicios que no hayan sido previamente autorizados o solicitados por el consumidor. En ningún caso el silencio podrá ser interpretado por el proveedor como señal de aceptación del cargo de parte del consumidor”.

En relación a lo anterior, es importante destacar que para la configuración del cobro indebido como conducta constitutiva de infracción, no se exige, entre sus elementos tipo, que el cobro en mención se haya concretado en todo caso, en el sentido que el consumidor hubiese pagado la suma cobrada indebidamente. La figura del cobro indebido se perfila cuando se realiza una exigencia de pago sin respaldo legal, esto es, cuando no se acredita la existencia de una obligación entre las partes. Y es que, debe aclararse que el cobro indebido se define como la acción de exigir alguna cosa de la cual no había derecho a cobrar.

Ahora bien, para que exista el derecho de cobrar, se requiere de la preexistencia de una relación contractual, de la cual se deriven obligaciones para ambas partes, que podrán consistir en prestaciones de dar, hacer o no hacer.

Asimismo, la Sala de lo Contencioso Administrativo, mediante sentencia pronunciada en el proceso bajo referencia 305-2010, sostiene que *«En ocasiones, los cobros indebidos tienen origen en una actuación "fraudulenta" o con malicia por parte del proveedor, sin embargo, la mayor parte de los casos corresponden a deficiencias en la administración interna del proveedor. El artículo 18 literal c) de la LPC, es el que nos enmarca como práctica abusiva efectuar cobros indebidos, éste artículo tiene una naturaleza enunciativa y no taxativa, ya que se entiende en la ley, en derecho comparado y en doctrina, que un agente económico realiza cobros indebidos cuando el proveedor cae en uno o más de los siguientes supuestos: a) cuando se cobra por medio de facturas o por cualquier otro medio con el mismo fin, servicios que no han sido efectivamente prestados; b) cuando se altera la estructura tarifaria sin que medie autorización del cobro por parte del consumidor; y c) cuando se efectúa un cobro sin el respaldo que lo legitime para realizarlo»*.

En ese sentido, y de conformidad a los ejemplos expuestos en el acápite anterior, el cobro indebido coloca al consumidor en una situación de desventaja, de desigualdad o que anule sus derechos. Motivo por el cual, lo descrito en el artículo 18 letra c) de la LPC es considerado una *práctica abusiva*.

En consecuencia, éste Tribunal deberá analizar según la prueba que consta en el expediente si la conducta atribuida a _____ encaja en el tipo contenido en el artículo 44 letra e) de la LPC, es decir, la realización de la práctica abusiva de cobros indebidos en perjuicio de los consumidores.

VI. Previo a realizar las valoraciones correspondientes, es necesario detallar prueba agregada en el presente procedimiento sancionatorio:

Prueba documental de cargo:

1. Nueve facturas en concepto de *cobros* por de la cuenta n° 5679326, correspondiente a los meses de mayo, junio, julio, septiembre, octubre y noviembre del año dos mil doce y febrero y marzo del año dos mil trece, que se incorporan de folios 7 a 9 emitidas por AISAPANM.

2. Comunicación escrita dirigido por la Junta Directiva de la Administradora Intermunicipal de los S

a los usuarios del servicio incorporada en folio 10.

3. Memorándum DVM 384/13 de fecha veintiséis de abril de dos mil trece, en el que se remitió al Centro de Solución de Controversias el informe de la constatación de hechos realizada de manera conjunta con el día dieciocho de abril de dos mil trece, incorporada en folio 27.

4. Acta de inspección, folios 28 y 29.

5. Listado de tarifas residenciales proporcionado por , incorporado en folio 34.

6. Copias de los documentos personales de los consumidores que se incorporan de folios 35 a 50.

7. Cruce de correo electrónico entre la técnico conciliador del Centro de Solución de Controversias y una empleada de la proveedora denunciada donde se refleja el estado de cuenta, catastro, histórico de consumo y consulta de inspecciones correspondiente a la cuenta , bajo el nombre de —representante de los consumidores afectados—, que consta en folios 56 y 57.

Prueba documental de descargo.

Acta de acuerdos bilaterales de fecha veinte de febrero de dos mil trece, para la liquidación y el cierre del contrato N° 43/2006 de servicios de administración para la prestación de los

, que se abrevia el día quince de agosto de dos mil seis (folios 120 y 121).

VII. Este Tribunal procede a valorar la prueba antes descrita conforme al sistema de la sana crítica, con el propósito de establecer la posible comisión de la infracción atribuida a la proveedora denunciada.

El artículo 146 de la LPC, establece que en el proceso, serán admitidos los medios de prueba reconocidos en el derecho común —en lo que fuere aplicable con la naturaleza de éste— y, los medios científicos idóneos.

En consonancia con el inciso final del artículo 146 antes relacionado, las pruebas aportadas en los procedimientos administrativos sancionatorios, serán valoradas según las reglas de la sana crítica, basadas en la lógica interpretativa, las máximas de la experiencia y en los conocimientos científicamente avanzados.

El Código Procesal Civil y Mercantil, -en adelante CPCM- de aplicación supletoria en el proceso de consumo (artículo 167 LPC), señala que la prueba tendrá por objeto las afirmaciones expresadas por las partes sobre los hechos controvertidos, que debe haber sido obtenida de forma lícita, y estar relacionada con el objeto de la misma, además de ser idónea según las reglas y criterios razonables. En otras palabras, para que una prueba sea valorada debe ser oportuna, pertinente y útil, por lo que la prueba está dirigida a la obtención de datos relevantes para la comprobación de los hechos litigiosos. En ese sentido, se valora lo siguiente:

a) Por medio de las facturas incorporadas en folios 7, 8 y 9, se establecen como hechos probados que: (i) efectivamente existió un *cobro por servicio de agua potable* de la cuenta N° 5679326, correspondiente a los meses de mayo, junio, julio, septiembre, octubre y noviembre del año dos mil doce y febrero y marzo del año dos mil trece; (ii) todas las facturas fueron emitidas por _____ consignando en ellas la frase “*por cuenta de*

b) Al comparar todos los valores facturados en los meses antes descritos con el listado de tarifas residenciales proporcionado por _____ -incorporado en folio 34-, se tiene como hecho probado que los valores cobrados coinciden con los precios que incluyen el servicio de alcantarillado estipulados en dicho listado, según los metros cúbicos consumidos.

c) Por medio del Acta de inspección de folios 28 y 29, se establece como hechos probados los siguientes: i) Que el _____ correspondiente a la cuenta número _____ pertenece a una _____, Que de la misma, se benefician quince _____ de la _____. Que en dicha comunidad no existe _____

d) Mediante el listado de tarifas residenciales consignado en folio 34, se determina que existe un precio diferenciado en el _____ respecto del precio fijado en concepto del _____. Al comparar las tarifas antes mencionadas, se tiene como hecho probado que el precio por _____ es menor a lo establecido en la

tabla de precios aplicada, que incluye el

esto a partir de los

De lo anterior se establece que ha existido la realización de cobros al colectivo de consumidores por un no brindado en concepto de , durante los meses de mayo, junio, julio, septiembre, octubre y noviembre del año dos mil doce y febrero y marzo del año dos mil trece.

Por tanto, en el presente caso, queda demostrado la existencia de cobros indebidos por el que no fue efectivamente prestado a la comunidad en referencia a la cuenta , y que no existe un respaldo legal que justifique el cobro realizado de una tarifa que es superior a los precios que solamente incluían el

, durante los meses de mayo, junio, julio, septiembre, octubre y noviembre del año dos mil doce y febrero y marzo del año dos mil trece. En consecuencia, los hechos se adecúan a la infracción prescrita en el artículo 44 letra e) en relación al artículo 18 letra c), ambos de la LPC.

VIII. Ahora bien, en aplicación al *Principio de Culpabilidad* establecido en el artículo 40 de la LPC, comete infracción a las disposiciones de la referida ley, el proveedor que "*en la venta de un bien o en la prestación de actuando con dolo o culpa, causa menoscabo al consumidor*". En ese orden, para determinar una sanción por incumplimiento a la norma, en el ejercicio efectivo de la potestad sancionadora, se precisa, naturalmente, de un sujeto activo al que se le haya comprobado la comisión de la conducta infractora, bien por acción u omisión.

En relación a lo expuesto, de conformidad a los hechos acreditados, *no se ha logrado determinar que fue quien efectuó cobros indebidos* por : no prestado a la Comunidad San Antonio, ni por haber cobrado sin respaldo legal una tarifa superior respecto a los precios que solamente incluían el cobro por durante los meses de junio de dos mil doce hasta marzo de dos mil trece.

En razón de lo anterior, este Tribunal advierte que no se logra establecer la participación de en la comisión de la infracción de *cobros indebidos* en perjuicio de la comunidad San Antonio; en consecuencia, siendo que los hechos —constitutivos de infracción— que le fueron atribuidos, no fueron realizados por dicha institución, debe absolverse a la referida proveedora.

IX. POR TANTO, conforme a los artículos 11, 14, 86, 101 inciso segundo y 102 de la Constitución de la República; artículos 216, 217, 218, 288, 310, y 317 del Código Procesal Civil

y Mercantil; 44 letra e), 18 letra c), 40, 47, 48, 49, 52, 69, 117, 143, 145, 146, 147 y 149 inciso segundo de la Ley de Protección al Consumidor; éste Tribunal **RESUELVE:**

Absolver a la

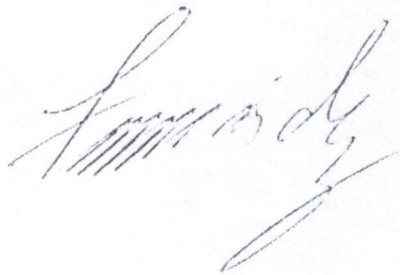
la infracción señalada en el artículo 44 letra e) de la LPC en relación al artículo 18 letra c) de la misma ley.

Notifíquese.



PRONUNCIADA POR LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL SANCIONADOR DE LA DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR QUE LA SUSCRIBEN.

N/gc



VOTO RAZONADO DE CLAUDIA MARINA GÓCHEZ CASTILLO.

Concurro con mi voto a la formación de la resolución de las catorce horas del día veintiocho de junio de dos mil diecisiete, en lo relativo a absolver a la la infracción señalada en el art. 44 letra e) de la Ley de Protección al Consumidor, en relación con el art. 18 letra c) de la misma ley, pero por una valoración probatoria distinta.

Después de haber entrado al análisis de fondo de los hechos denunciados, y bajo las reglas de la sana crítica, al realizar el análisis de tipicidad y culpabilidad (bajo el razonamiento seguido en la aludida resolución), –a mi juicio– no se ha establecido fehacientemente cuál es el tarifario que era aplicable al servicio de agua potable brindado a los consumidores incluidos en la denuncia durante el período reclamado; existen indicios de la participación de en los hechos denunciados; pero, con la prueba aportada en el procedimiento lo que no se logra es llegar a la determinación del grado de participación de como sujeto activo de la

conducta antijurídica tipificada en la norma—grado de autoría de las acciones consideradas en los hechos denunciados—, y tampoco existe prueba suficiente del elemento subjetivo del tipo en cuanto al grado de culpabilidad (dolo o culpa), por los razones que expongo a continuación:

I. Se ha establecido con prueba fehaciente lo siguiente:

1) Los cobros por el servicio de agua potable en la Comunidad San Antonio en San Juan Nonualco, durante los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre de dos mil doce, febrero y marzo de dos mil trece, eran efectuados por AISAPANM “*por cuenta de*”, **según se les informaba a los consumidores mediante las facturas**. (Copias confrontadas de las facturas agregadas a folios 7, 8 y 9; letra “d” del art. 19 de los Estatutos de Creación de AISAPANM publicados en el Diario Oficial N° 92, Tomo 371, del 22 de mayo de 2006, cuya fotocopia consta agregada de folios 80 al 92)

2) La facturación de AISAPANM debía ser emitida conforme a las reglas legales aplicables y a las dictadas por el Ministerio de Hacienda. (Art. 64 de los Estatutos de Creación de AISAPANM publicados en el Diario Oficial N° 92, Tomo 371, del 22 de mayo de 2006, cuya fotocopia consta agregada de folios 80 al 92)

3) AISAPANM podía suscribir contrato de prestación de servicios con , por el servicio de agua y alcantarillados proporcionado a la población, realizar cobros de operación por dichos servicios a los usuarios, de conformidad al decreto tarifario vigente aprobado según resolución emitida por el Órgano Ejecutivo en el ramo de Economía, y que dichos cobros constituyeran parte de sus ingresos. (Arts. 55 y 56 letra “a” de los Estatutos de Creación de AISAPANM)

4) y AISAPANM firmaron un acuerdo para la liquidación y el cierre del contrato de servicios N°43/2006, suscrito el 15 de agosto de 2006, concerniente a la administración para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en los municipios de San Antonio Masahuat, San Pedro Masahuat, El Rosario, Santiago Nonualco, San Rafael Obrajuelo y San Juan Nonualco. En virtud de ese acuerdo, **retomaría el servicio** en dos etapas: la gestión operativa a partir del 1 de marzo de 2013 y la gestión comercial a partir del 1 de abril de 2013, fecha desde la cual **AISAPANM ya no podría recolectar pagos** provenientes de los usuarios por servicios prestados. Además, ANDA sería la responsable de comunicar a la población atendida por AISAPANM que retomaría la administración a partir del 1 de abril de 2013. (Documento agregado a folios 120 y 121 en fotocopia simple, presentado como prueba de descargo por el apoderado de)

II. Tomando en cuenta las consideraciones jurisprudenciales de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (Sentencia definitiva pronunciada el 8/7/2008 en el proceso de Hábeas Corpus N° 36-2008), los indicios configuran un modo de valoración de determinados hechos o circunstancias debidamente acreditados en el proceso que permiten la deducción de otros, así como la participación y responsabilidad en ellos.

Sin embargo, *“la prueba indiciaria debe cumplir requisitos, como que el propio hecho delictivo esté acreditado por prueba directa, la autoría ha de inferirse de hechos indiciarios plenamente*

probados y racionalmente conectados con el hecho delictivo, debiendo excluirse las meras sospechas o conjeturas, no deben existir indicios exculpatorios que hagan dudar de la virtualidad incriminatoria del indicio" (Sentencia de Hábeas Corpus antes referida).

Además, entre los indicios probados y los hechos que se infieren de ellos debe existir un enlace preciso, directo, coherente, lógico y racional, pues la falta de concordancia o razonabilidad del enlace entre el indicio y lo deducido de éste, puede producirse por no concurrir lógica o coherencia en la inferencia, así como por el carácter no concluyente por excesivamente abierto, débil o indeterminado.

III. De los hechos probados y de la prueba de descargo consistente en fotocopia simple del documento de Acuerdos bilaterales celebrados entre . y AISAPANM (agregado a folios 120 y 121) se deduce, a título de indicio, lo siguiente:

- 1) y AISAPANM suscribieron un contrato de servicios N°43/2006, **el 15 de agosto de 2006**, concerniente a la administración para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en los municipios de San Antonio Masahuat, San Pedro Masahuat, El Rosario, Santiago Nonualco, San Rafael Obrajuelo y San Juan Nonualco.
- 2) Había infraestructura de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario que le fue entregado **en custodia** a AISAPANM para que los administrara, operara y les diera mantenimiento.
- 3) Hubo equipo informático que le había entregado a AISAPANM en calidad de **préstamo de uso**. Inclusive había un sistema de gestión comercial, documentación técnica, administrativa, comercial y financiera generada durante la gestión de AISAPANM, que debía ser entregada a . en ejecución del contrato de servicios antes mencionado.

IV. En materia administrativa sancionadora, nuestro ordenamiento constitucional impone la aplicación de principios, garantías y limitaciones aplicables, entre ellos la *presunción de inocencia* que excluye la posibilidad de imponer sanciones por criterios de responsabilidad objetiva. Íntimamente vinculado con lo anterior, rige el **principio de culpabilidad**, que supone la imputación al administrado de dolo o culpa en la conducta sancionable, siendo sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativas sólo las personas que resulten responsables a quienes se compruebe vínculo de culpabilidad. Esto a su vez supone, en principio y en términos generales, que respecto a los hechos ilícitos atribuidos, la persona tuviera la posibilidad de saber qué hace y la libertad para determinar su comportamiento.

La **actividad probatoria de cargo** y que demuestre la culpabilidad del inculcado, incluye toda prueba acusadora que exista en contra del imputado, y debe ser suministrada por la acusación (Sentencia definitiva de la Sala de lo Constitucional, del 6/6/2008 en proceso de Hábeas Corpus N° 4-2008), sin perjuicio de la libre valoración de la prueba hecha por el juzgador que conozca del caso concreto, y de la facultad legal que pueda tener la Administración pública sancionadora para solicitar prueba complementaria.

En síntesis, para probar la culpabilidad de una persona, es preciso que la conducta demostrada en la comisión del hecho ilícito sea dolosa o culposa, es decir, que haya sido querida por su autor, o que se haya debido a su imprudencia; además, para que una persona pueda ser considerada como culpable de un hecho doloso o culposo, éste ha de ser atribuible a su autor, como producto de una motivación racional normal –principio de imputación personal o culpabilidad en sentido estricto–. (Sentencia definitiva de la Sala de lo Constitucional, del 8/7/2008 en proceso de Hábeas Corpus N° 36-2008)

V. En cuanto a la aplicación del principio de culpabilidad los apoderados de la denunciada alegaron que:

- a) Debido al acuerdo conciliatorio alcanzado con los consumidores afectados, no existe una afectación económica ni violación a los derechos del consumidor, por cuanto ya hubo una reparación del supuesto daño causado de parte de la institución hacia el colectivo denunciante; y,
- b) Durante el período reclamado el servicio de agua potable era administrado por AISAPANM, por lo que en todo caso el cobro indebido fue efectuado por dicha administradora, y en consecuencia existe “falta de legitimación de la infracción respecto a su representada”.

VI. En coherencia con todo lo anterior, este Tribunal se encuentra en la obligación de valorar no sólo la prueba, sino también los elementos presentados por el sujeto infractor para demostrar que no existió nexo de culpabilidad en la comisión de la infracción, independientemente del resultado al que se arribe.

En primer lugar, considerar que debido al acuerdo conciliatorio alcanzado entre los consumidores afectados, no existe una afectación económica ni violación a los derechos del consumidor, por cuanto ya hubo una reparación del supuesto daño causado de parte de la institución hacia el colectivo denunciante, sería contrario a derecho, por cuanto el acuerdo conciliatorio no es prueba de aceptación de responsabilidad administrativa de parte del denunciado (art. 111 inciso final Ley de Protección al Consumidor) y la reparación o restitución que el acuerdo haya podido significar no es excluyente de responsabilidad administrativa como ya se ha dicho en la resolución.

En segundo lugar, a mi juicio, para el período de mayo de dos mil doce a marzo de dos mil trece, se cuenta con prueba indiciaria que permite deducir la participación de [redacted] en el servicio de agua potable a los consumidores por medio de la celebración de un contrato de servicios con AISAPANM, la entrega de bienes en custodia y en préstamo de uso dados por [redacted] a AISAPANM, y prueba de que AISAPANM informaba que cobraba por cuenta de [redacted], así como de que [redacted] “retomó” la responsabilidad frente a los consumidores por la prestación del servicio de agua potable a partir del 1 de marzo de 2013. Sin embargo, no se ha podido determinar de forma precisa, directa, coherente, lógica y racional que [redacted] haya participado en la determinación de la tarifa, que por cuenta de [redacted] fue cobrada por

AISAPANM a los consumidores considerados en la denuncia del presente caso, según se les informó en las facturas.

Ante tales circunstancias, es preciso tener en cuenta que imponer una multa fundada únicamente en la existencia de la infracción como tal, sin determinar claramente la participación de la denunciada en la comisión de la conducta ilícita y la existencia de dolo o culpa, resultaría contradictorio con los principios de culpabilidad y la presunción de inocencia que rigen en el ámbito administrativo sancionador.

En consecuencia, ante la falta de certeza probatoria suficiente, a partir de las pruebas que han sido aportadas durante el procedimiento, y sin que conste el contrato de prestación de servicios entre y AISAPANM ni decreto tarifario vigente aprobado según resolución emitida por el Órgano Ejecutivo en el ramo de Economía, procede aplicar lo más favorable a la denunciada **-principio indubio pro reo-**, y absolverle de responsabilidad.


PRONUNCIADO POR LA MIEMBRO DEL TRIBUNAL SANCIONADOR QUE LO
SUSCRIBE.

